



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: IVÁN DARÍO TORO RESTREPO
Demandado: COLPENSIONES Y OTRO.
Procedencia: JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA. n° 018
Radicado n.º: 05001-31-05-018-2022-00186-01 (O2-24-006)

En Medellín, a los once (11) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo n.º 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad pública accionada, dentro del proceso ordinario instaurado por **IVÁN DARÍO TORO RESTREPO** en contra de **COLPENSIONES**, y **PROTECCIÓN S.A.**, dentro del proceso con radicado n.º 05001-31-05-018-2022-00186-01 (O2-24-006).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. Mediante vocero judicial, el demandante **IVÁN DARÍO TORO RESTREPO** pretende que se declare la ineficacia del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, que se reconozca como válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al RPMPD, y en consecuencia, se ordene a **PROTECCIÓN S.A.** que traslade a **COLPENSIONES**, todos los valores que se encuentran en la cuenta de ahorro individual, y el pago de las costas procesales.

Como sustento fáctico señaló que nació el 26 de julio de 1963; que comenzó a cotizar al extinto ISS, hoy Colpensiones; que se trasladó a **PROTECCIÓN S.A.** el 05 de octubre de 1994; que al momento del traslado no se le suministró información clara, completa, y

suficiente, que le permitiera tomar una decisión de forma consciente e informada frente al traslado, como tampoco las ventajas y desventajas de ambos regímenes; que solicitó ante COLPENSIONES el traslado de régimen pensional el 23 de marzo de 2022, el que fue denegado mediante comunicado de la misma fecha. (Fols. 2 a 6 archivo No 05).

1.2 Trámite de primera instancia y contestación de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 12 de septiembre de 2022 (doc. 6 pág. 1 y 2), con el cual ordenó su notificación y traslado a las partes accionadas.

1.2.1 COLPENSIONES: Una vez notificada (doc. 7 pág. 1), contestó la demanda el 5 de octubre de 2022 a través de apoderado judicial (doc. 08 pág. 1 a 19), oponiéndose a las pretensiones formuladas, toda vez que el traslado del actor se presume válido hasta tanto no se demuestre vicio en el consentimiento; que la ineficacia del traslado no se puede estudiar como una tarifa legal, sino que debe evaluarse la situación particular de cada caso; que el demandante se encuentra en la prohibición legal de traslado al faltarle menos de diez años para adquirir el derecho pensional. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de aceptar la vinculación al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES; inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES en caso de ineficacia del traslado de régimen; responsabilidad *sui generis* de las entidades de la seguridad social; sugerir un juicio de proporcionalidad y ponderación; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez, retroactivo pensional y/o intereses de mora; improcedencia de la indexación de las condenas; prescripción, compensación; buena fe; imposibilidad de condena en costas; y declaratoria de otras excepciones.

1.2.2 PORVENIR S.A.: Luego de notificada (doc. 7 pág. 1 y 2) contestó la demanda el 23 de febrero de 2023 por intermedio de vocera judicial (doc. 10 pág. 2 a 25), en la que manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda, como quiera que el traslado fue un acto existente, válido, exento de cualquier vicio en el consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo; que el acto de traslado se realizó de manera libre y espontánea, solemnizándose con la firma; que no puede pregonarse la ineficacia del traslado motivado con el valor de la mesada pensional que le pueda generar en el RAIS; que para el momento del traslado la AFP no tenía obligación de brindar información escrita, ni mucho menos hacer cálculos pensionales. En su defensa, propuso los medios exceptivos de mérito que postuló: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de

devolver comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, y la innominada o genérica.

1.3 Decisión de primer grado. El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 2023 (doc. 28 pág. 1 a 11 con link de audiencia virtual) con la que la cognoscente de instancia declaró la ineficacia de la afiliación; ordenó a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES, de manera inmediata, todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación, tales como cotizaciones, con los rendimientos, gastos de administración, prima de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados; ordenó que se reactive la afiliación al RPMPD sin solución de continuidad; declaró no probadas las excepciones, y finalmente, gravó en costas a PROTECCIÓN S.A..

1.4. Grado jurisdiccional de consulta. La decisión no fue recurrida por las partes procesales, y de consiguiente, se remitió el proceso para ser estudiado en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES.

1.6. Trámite de segunda instancia. El grado jurisdiccional de consulta fue admitido por esta corporación el 29 de enero de 2024 (carp. 2, doc. 2), y mediante el mismo proveído se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, siendo que ninguna de las partes presentó alegaciones en segunda instancia.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1 Grado jurisdiccional de consulta. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver la providencia en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, de conformidad con el artículo 69 del CPTSS, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 Problemas jurídicos. El *thema decidendi* en la presente Litis se circunscribe en definir:
i) ¿Si operó la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional efectuado por el extremo litigioso por activa a la AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad convidada a juicio?, y de ser así, ii) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la ineficacia del traslado?

2.3 Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados. El sentido del fallo de esta Corporación será **CONFIRMATORIO** en relación con la ineficacia del traslado de régimen pensional, en consideración a que no se acreditó el cumplimiento del deber de información integral en la antesala del traslado del régimen pensional, así como también, en lo referente a las consecuencias jurídicas que conlleva la devolución de las cotizaciones, en el sentido de incluir que el traslado de las sumas descontadas por gastos o comisión de administración, aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y pago de primas de seguros previsionales, debidamente indexados; no obstante, se **ADICIONARÁ** lo respecto al término con que cuenta la AFP para efectuar la devolución de tales emolumentos, de acuerdo con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.4 Ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS. En lo que interesa a la Litis, no es objeto de discusión los siguientes hechos: que la accionante nació el 26 de julio de 1963 (doc. 5 pág. 160); que se afilió al ISS, hoy Colpensiones el 01 de noviembre 1984 (doc. 5 pág. 95); que no es beneficiario del régimen de transición por edad (ibíd. pág. 160), ni por tiempo de servicio (ibíd. pág. 95); que se afilió al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., (ibíd. Pág. 73) el 05 de octubre de 1994; y que solicitó su traslado a COLPENSIONES el 25 de marzo de 2022 (ibíd. pág. 71) al que no accedió la entidad mediante comunicado de la misma calenda (ibíd. pág. 72).

2.5 Carga de la prueba y deber de información. Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que esta Colegiatura viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008, hasta la sentencia SL610-2023, línea jurisprudencial en la que se cimienta el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que el formulario de afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor del afiliado como parte débil de la relación jurídica, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiario del régimen de transición, o esté próximo o no a pensionarse.

Descendiendo al *sub lite*, conviene precisar que para la fecha del traslado de régimen pensional el día 05 de octubre de 1994, la AFP PROTECCIÓN S.A. tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que en palabras de la H. Corte Suprema de Justicia

en sentencia SL1217-2021, consiste en: *“ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación inicial, se allegó el correspondiente formulario de afiliación al RAIS (doc. 10 págs. 38), probanza de la que no se desprende que de manera documentada se haya presentado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta explicar los beneficios de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, mismas que no fueron explicitadas previo al momento de efectuarse la afiliación y traslado del régimen pensional.

En este punto, estima pertinente la Sala acotar que si la AFP encartada no cuenta con ningún soporte documental para la fecha del traslado de régimen, al brindarse la información únicamente de manera verbal, tal circunstancia deja entrever una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegar un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que la Superintendencia Financiera de Colombia indica deben reunirse para el traslado voluntario de régimen pensional, sino que se requiere acreditar la efectiva asesoría integral brindada en la antesala del traslado de régimen, ilustrando al interesado sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, con la advertencia de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima debían efectuarse aportes voluntarios superiores a las deducciones de ley por cotizaciones; que para causar la pensión de vejez se debe contar con una suma dineraria mínima en la cuenta de ahorro individual; que la existencia de eventuales beneficiarias por sobrevivencia incrementan dicha suma mínima requerida, entre otras particularidades, en razón a que la asesoría no debe estar encaminada a persuadir al afiliado con llamativos rendimientos financieros o la posibilidad de acceder a la pensión sin importar la edad, sino que debe atender también a que el afiliado pueda lograr la prestación económica que mejor se acomode con sus expectativas pensionales y densidad cotizacional.

Ahora, si bien el litigioso por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que al momento de su traslado participó de una reunión con el asesor, no puede pasar por alto la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión del afiliado fue verdaderamente libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, pues por el contrario, el accionante aclaró que la asesoría brindada previamente a la afiliación fue superficial y fragmentaria, pero sin explicarle cuáles eran las características particulares y comparativas del RAIS y del RPMPD, ni las posibles desventajas de su traslado, con lo cual, yergue palmaria la falta de información cualificada, y por ende, la ineficacia del traslado de régimen pensional.

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió y trasladó el pretensor, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el ejecutivo de servicios que atendió al litigioso por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial el afiliado, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado de régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas hechas por el pretensor en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción de la parte demandante frente a un tema de alta complejidad como lo es la liquidación y cálculo de una mesada pensional, como también las referidas a que no haya realizado indagaciones de su situación pensional por propia cuenta, en tanto el deber de brindar tal información privilegiada corresponde *ope legis* a la AFP.

2.6 Saneamiento de la ineficacia ante el transcurso del tiempo. Ha de indicarse que bajo el supuesto de la declaratoria de saneamiento de la ineficacia generada por la falta de información en razón del simple paso del tiempo, el máximo tribunal de esta jurisdicción, entre otras, en la sentencia SL 1688-2019, puntualiza que el hecho de que el demandante haya permanecido muchos años en el RAIS, no tiene la virtualidad o aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado de régimen pensional, toda vez que la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, pues como se explicó, el afiliado requiere para tomar la mejor decisión en función de sus intereses y expectativas la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información actualizada, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato sólo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda

al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente, pierde su utilidad, lo que equivale a ausencia de información.

De igual forma, la H. Corte Suprema de Justicia estudia la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del *status quo*, indicando que: *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Así las cosas, el paso del tiempo no convalida la ineficacia del traslado de régimen pensional, así como tampoco opera el saneamiento de la nulidad relativa, por lo que habrá de confirmarse la decisión de instancia en este tópico.

2.7 Traslado de las cotizaciones. A este respecto, es preciso indicar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia del máximo tribunal de esta jurisdicción, en sentencias como las SL31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, al tiempo que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que dicha entidad sea un tercero la imposibilite para recibir los aportes, por la simple y llana razón de que esta entidad administra el régimen de prima media con prestación definida, y atendiendo a que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 los dos regímenes de pensiones si bien coexisten son excluyentes, y por tanto, una vez declarada la ineficacia del traslado, consiguientemente la AFP deberá devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación.

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL2877-2020, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual se trasuntan algunos apartes:

“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que el demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros

previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.”

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado como aportes al fondo de garantía de pensión mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010) y las erogaciones por primas previsionales de la aseguradora, pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, pues a pesar de que tales descuentos tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente preestablecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento de un fondo de garantía, aquellos nunca hubieran sido deducidos por la AFP de no haberse verificado la afiliación y traslado de régimen pensional.

En esa misma dirección, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todas las cotizaciones y sus rendimientos a COLPENSIONES, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no sólo la sostenibilidad financiera del sistema sino también la efectividad del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no soslaya esta Sala que existe un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en torno del tema, cumple acotar que dicha Circular aborda es el traslado de régimen pensional por voluntad propia y no sobrevenido en virtud de la declaratoria de su ineficacia, además de no ser de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales (Radicado 17784 de 2002), y por ello, la Sala se aviene al precedente jurisprudencial que en derredor del tema ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ampliamente quedó dicho en líneas anteriores.

Así mismo, debe ordenarse que la devolución de los descuentos de manera indexada (SL 3321-2021 y SL1637-2022), atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, esto es, no fue materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su

reconocimiento oficioso, en la medida en que ello no se traduce en una condena sino en el reconocimiento del efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos debido al transcurso del tiempo, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral.

En suma, vale acotar por recapitular los predicamentos del máximo tribunal de casación laboral, en la sentencia SL1126-2022, Radicación n.º90257, del 23 de marzo de 2022, M.P. Omar Ángel Mejía Amador, al describir de forma meridiana cuál es la carga asumida por los fondos privados, aun tratándose de traslados horizontales dentro del RAIS, como también qué significa la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los siguientes términos: “...Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima y las primas de los seguros previsionales, **sumas debidamente indexadas**, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020, SL 5595-2021). Y sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer Colpensiones por los conceptos adeudados a favor del demandante generados en virtud de los múltiples traslados”. -Subrayas de la Sala-

Ello así, habrá de declararse la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional, a la vez de ordenar el retorno del actor al RPMPD a cargo de COLPENSIONES sin solución de continuidad, bajo la ficción jurídica de que nunca se desafilió de esta última entidad de seguridad social, junto a la devolución de todos los aportes en la cuenta de ahorro individual de la demandante y rendimientos financieros irrogados, incluyendo los rubros detraídos de las cotizaciones por la AFP PROTECCIÓN S.A., los que deberán devolverse debidamente indexados.

Frente a todas las devoluciones antes referidas, se precisará que tal orden se deberá realizar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, pues esta Sala de Decisión Laboral es del criterio que para estos eventos es aplicable el artículo 16 del Decreto 692 de 1994. Igualmente se precisará que las aludidas devoluciones se deberán cumplir siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016.

En el *sub examine*, como quiera que la orden impartida a PROTECCIÓN S.A. engloba los conceptos atrás delineados, junto con la indexación, se confirmará la decisión al respecto; no obstante, como quiera que no se dijo nada sobre el término que tiene la AFP para proceder a la devolución de tales emolumentos, habrá de adicionarse el fallo de instancia en el sentido de disponer que la AFP PROTECCIÓN S.A. debe cumplir la orden de traslado antes de 30 días calendario de que trata el inciso 3 del artículo 16 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, aún vigente.

2.8 Excepción de prescripción. En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memora que *“a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria”* (SL1465-2021), a más de que la Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia fuerzan el traslado de las aportaciones de manera integral, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele, como así lo decantó la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL361, radicación 63615 del 13 de febrero de 2019.

2.9 Costas. Sin costas en esta instancia, en tanto la sentencia de primer grado fue analizada integralmente en el grado jurisdiccional de consulta. Las de primera instancia se confirman, en tanto que no se impusieron a COLPENSIONES.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR al numeral **TERCERO** de la sentencia materia de consulta proferida el 14 de diciembre de 2023 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, que la AFP PROTECCIÓN S.A., traslade a COLPENSIONES todos los conceptos enunciados en el referido numeral, dentro del término de treinta (30) días calendario a la ejecutoria de la presente providencia, de que trata el inciso 3, artículo 16 del Decreto 692 de 1994, y bajo los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016, según y conforme la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia que se revisa por vía de consulta.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, prohibiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario